

JUSTINO SINOVA

Para qué sirve una nacionalización

La expropiación-nacionalización del grupo Rumasa ha tenido consecuencias que podrían considerarse favorables al Gobierno. Este es un análisis de los efectos políticos de la medida, ya identificables, antes de que las decisiones económicas empiecen a dar su fruto.

CRONICAS DEL CAMBIO

Hay una táctica investigadora que suele dar buenos resultados. Consiste en preguntarse por el beneficiario de la acción que se analiza y casi siempre resulta ser el autor del caso. Autoría y beneficio van siempre unidos. Salvando las distancias, en la operación de expropiación-nacionalización del grupo Rumasa podemos usar, sin miedo al error, parecido proceso mental. Tenemos el autor, sabemos el beneficiario: el propio autor, es decir, el Gobierno; es decir, el partido del Gobierno.

Escribo, por supuesto, de las consecuencias políticas de la moderada nacionalización de Rumasa (que así debe entenderse lo que el Gobierno llama expropiación) y no de sus efectos económicos. Para valorar éstos hace falta oír todavía la versión de la parte afectada y esperar los resultados de la gestión del Estado. En cambio, la dimensión política parece estar más clara.

El efecto más inmediato de la nacionalización, pasados los primeros momentos de estupor y desconcierto, ha sido el movimiento de adhesión y apoyo a la medida y, en un sentido amplio, a la política del PSOE que se ha producido en el mundo laboral. Hay que tener en cuenta que la nacionalización del grupo Rumasa ha sido la primera medida propia de un Gobierno socialista, al que ya se empezaba a censurar incluso en los ambientes laborales que más habían contribuido a su triunfo electoral.

Apoyo al Gobierno

La nacionalización tiene una fuerza de símbolo que ninguna promesa gubernamental ni, acaso, ninguna decisión de favor hacia los trabajadores pueden superar. Todas las batallas sociales se han librado con acciones más efectistas que positivamente rentables. Hemos visto estos días que el apoyo laboral a la nacionalización ha sido casi automático. Ha habido en el fin de semana una paradoja que, en mi opinión, es sumamente reveladora. Comisiones Obreras, el sindicato comunista que está haciendo de oposición al PSOE, se permitió exponer algunas disidencias al acuerdo alcanzado con la Administración, que es realmente el primer convenio colectivo de la historia que

afecta a los funcionarios y que incrementa el sueldo de éstos en un 12 por 100. Pero no dudó un instante en apoyar por completo la medida de nacionalización.

La nacionalización es una bandera política en manos del Gobierno socialista, cuyo primer beneficiario es el propio Gobierno. Habrá que ver si el apoyo de los sectores laborales no va acompañado de una retracción en los sectores empresariales, pero eso será, en tal caso, una consecuencia económica y aquí hablamos de los efectos políticos, efectos que se han manifestado en la inmediata reacción de la derecha contra la medida y en el apoyo incondicional de los medios de expresión afines al PSOE. El diario «Pueblo» ya saludaba la medida como muy positiva en sus ediciones del jueves, unas pocas horas después de ser anunciada oficial y escuetamente.

Un grupo conservador

Hay otro aspecto del problema más delicado cuyo solo enunciado podría considerarse polémico. Rumasa era un grupo políticamente conservador o, dicho más exactamente, Rumasa estaba dirigido por hombres de talante muy conservador, respetuosos con la Constitución, pero discrepantes de la política socialista. El traslado de la gestión de Rumasa a manos públicas, manejadas por el Gobierno, desactiva uno de los recursos a los que podría acudir la oposición para discutir popularmente algunas decisiones del Ejecutivo socialista. Es decir: Rumasa podría ser motivo de pesadilla para el Gobierno, con José María Ruiz Mateos a la cabeza. Hoy, Rumasa juega a favor.

No se entienda que estas consecuencias de la nacionalización —la recuperación del entusiasmo laboral y la eliminación de un posible émulo para algunas disputas políticas— han sido las determinantes en la decisión del Gobierno. Eso habría sido una frivolidad gravísima que no es concebible en este Gobierno. Si ha habido una estrategia dudosamente correcta, desde el momento en que el superministro Miguel Boyer amenazó públicamente al grupo y provocó una elevada retirada de fondos de los bancos de Rumasa. Boyer ha dado a Ruiz Mateos un



La medida, explicada por Miguel Boyer, ha ocasionado una inmediata adhesión al Gobierno, cuando algunos entusiasmos se estaban enfriando.

buen puñado de argumentos para la réplica.

Pero, como si el Gobierno fuera consciente de esa

fragilidad en la aplicación de la medida —que ofrece serias dudas de constitucionalidad—, la reacción durante el fin de semana por medio de Televisión Española ha sido fulminante. Quien haya visto todos los telediarios desde el jueves al domingo habrá podido sacar la conclusión de que la nacionalización de Rumasa ha sido la medida más acertada, positiva y eficaz que a Gobierno alguno se le podría ocurrir. Ha habido algún espacio para la discrepancia —como fue, por ejemplo, un dictamen jurídico de Luis Sánchez Agesta—, pero el conjunto de la información ha servido para apoyar el acuerdo del Gobierno. Es éste un aspecto tangencial, pero que demuestra, una vez más, cómo un medio público de información, que se promete pluralista e imparcial, acude en ayuda de quien manda.